

Notas del mes

Cuaderno de crisis / 1

Por *Albert Recio Andreu*

La impunidad del franquismo

Por *Xavier Domènech*

Zapatero en Afganistán

Por *Juan-Ramón Capella*

La otra austeridad necesaria

Por *Joaquim Doderó Curtani*

El Gramsci del Arzobispo

Por *Juan-Ramón Capella*

Izquierda Unida nombra a la Virgen del Rosario “alcaldesa perpetua” de Teba (Málaga)

Por *Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Ateos (FIdA)*

Las dos Gomorras

Por *Mariano Maresca*

En la pantalla

La cuestión humana

Nicolas Klotz

La Biblioteca de Babel

Todo fluye

Vasili Grossman

El chino

Henning Mankell

Lo que en nosotros vive

Manuel Fernández-Montesinos

Misteriosament feliç

Joan Margarit

Vivir (bien) con menos. Sobre suficiencia y sostenibilidad, ¿En qué estamos fallando? Cambio social para ecologizar el mundo

Manfred Linz, Jorge Riechmann (ed.) y Joaquim Sempere; VV.AA. (Jorge Riechmann, coord.)

Albert Recio Andreu

La crisis del auto

Los piratas toman rehenes para conseguir rescates. Saben que pagaremos para salvar vidas. La mafia calabresa ha generado un buen negocio con este método. La industria automovilística hace tiempo que práctica una táctica similar. No toma rehenes. Amenaza con despidos masivos y con cerrar las plantas del país, lo que generaría un efecto en cadena en la industria proveedora. Cada vez que Volkswagen, Ford, Opel, Renault, Peugeot o Nissan han amenazado con un cierre han conseguido buena tajada: lo que empieza con la movilización sindical y la de los políticos de la Comunidad autónoma afectada casi siempre acaba con ayudas públicas y concesiones sindicales. La amenaza de recorte masivo de Nissan y el anunciado cierre temporal de todo el sector en diciembre constituyen una nueva versión, más sublime, de las viejas peripecias experimentadas en Seat, Volkswagen Navarra o Ford Almusafes. Por fin, han obligado al Gobierno a anunciar un generoso programa de ayuda integral al sector en forma de 800 millones de euros.

La justificación es siempre la misma: salvar a un sector estratégico que se encuentra en el núcleo de nuestra actividad industrial. En los últimos tiempos se ha añadido la coartada ambiental. Ésta ha sido la justificación de los planes Renove —subvenciones por la compra de vehículos más modernos y contaminantes— y del nuevo plan que apuesta por el vehículo eléctrico como modelo de “transporte sostenible”. Pero estas justificaciones no deben esconder otras realidades. Hasta ahora —y previsiblemente también ocurrirá con el nuevo plan—, una gran parte de la subvención se dirige a la promoción del consumo. Esto va en interés de las grandes firmas automovilísticas y del sector de concesionarios, pero dudosamente mejora la posición de la industria local, debido a que prácticamente el 80% de vehículos que se venden en España son de importación. La razón no es otra que la extrema especialización impuesta por las grandes multinacionales a las plantas españolas: la mayoría sólo producen vehículos pequeños que se exportan al mercado. Promover la compra de coches nuevos tiene poco impacto sobre la demanda local y posiblemente deteriora aún más la balanza comercial española.

Las constructoras se alborozaran con las ayudas prometidas a la reducción de costes —presumiblemente bonificaciones a la Seguridad Social— y con las subvenciones a la innovación tecnológica, pero esto es dudoso que tenga efectos espectaculares a nivel local. Como hace tiempo que se sabe, la mayor parte de subvenciones laborales son “peso muerto”: las empresas no generan

más empleo por recibir subvenciones, simplemente abaratan costes. Y la decisión de irse o quedarse es independiente de las mismas. De hecho, la mayor destrucción de empleo en el sector se ha producido en aquellos segmentos de la industria auxiliar (especialmente el cableado eléctrico) que por la ubicación geográfica de las plantas (en provincias de baja densidad industrial y escasa organización sindical) gozaban de salarios bajos y elevadas subvenciones. En el contexto actual no hay ninguna garantía de que las subvenciones tecnológicas se empleen allí donde se conceden. Posiblemente tampoco la hay de que se usen para un fin útil, a la vista de las dudas que genera la viabilidad del coche eléctrico. La historia industrial reciente está llena de aventuras en las que el primer objetivo de las grandes empresas no es la bondad del cambio técnico *per se* sino la del *toma el dinero y corre*, como ya puede visualizarse en el caso de los biocombustibles. En el caso español todo ello es mucho más preocupante por el hecho de que la industria está completamente en manos de grandes multinacionales foráneas para las que el país es una mera parte del tablero de juego, y como todo jugador conoce a menudo el sacrificio de una ficha es visto como parte de la estrategia ganadora.

Falta por ver además en qué se concretará el plan integral en materia laboral. La industria del automóvil ha sido pionera en innovaciones organizativas múltiples: uso sistemático de los EREs temporales como forma de abaratar costes, flexibilidad horaria en forma de turnos, trabajo en fin de semana o vacaciones, empleo temporal, subcontratación interna (lo más llamativo de la “crisis” de Nissan es el despido de 300 trabajadores de una filial de la constructora Acciona que montaban motores en la planta de Zona Franca) y externa. En la industria auxiliar las cosas son aún peores, puesto que los grandes ensambladores de vehículos han ejercido una enorme presión de costes sobre la industria laboral que ha ido adoptando a su vez sus formas particulares de flexibilidad. A las ya citadas debemos añadir un mayor recurso al empleo temporal y a ETTs, así como la enorme fragmentación de la negociación colectiva: a menudo en cada planta de una misma empresa rige un convenio colectivo diferente, un buen mecanismo de discriminación salarial encubierta. Las peores condiciones se encuentran en las plantas de los parques industriales vecinos a las grandes plantas (donde se ensamblan partes del proceso, como puertas o asientos) y en el sector de montajes electrónicos (aunque ya ha emigrado en gran parte al Este de Europa o a Marruecos). Podemos esperar más de lo mismo. Ya hay, por ejemplo, una ofensiva en la cuestión del absentismo, bajas por enfermedad que a menudo son el resultado de las condiciones de *stress* y a las lesiones que generan los duros trabajos del sector. Sin cambiar las relaciones de poder dentro del sector, ni su lógica productiva, las políticas de subvenciones y las concesiones laborales seguirán siendo las dos variantes de un mismo diseño político.

La pregunta sin duda relevante es por qué hay que seguir “apostando” por un sector que a su voracidad fiscal y su rapiña laboral suma el hecho de ser uno de los principales causantes de los problemas ecológicos. Algo visible sólo considerando su aportación al calentamiento global, pero a lo que hay que sumar todos los efectos indirectos de su ciclo productivo (producción y consumo de materiales, generación de residuos), el impacto espacial y medioambiental del modelo territorial al que está asociado su uso y los efectos dañinos de los accidentes de tráfico. La crisis ambiental exige un cambio radical de modelo de movilidad y éste debería ser el momento para impulsar otro tipo de reconversión industrial. La que sin duda generaría el cambio a un modelo de transporte colectivo que también exigiría el desarrollo de un amplio abanico de actividades y que posiblemente permitiría una adaptación relativamente sencilla de parte de la industria auxiliar. Si ello no se plantea no es sólo por la habilidad del club de los fabricantes en plantear sus demandas. Es también el producto del enorme poder simbólico que ha alcanzado el automóvil y la industria automotriz en nuestra sociedad. Algo que prueba el mismo hecho de que el caso emblemático de la crisis que se percibe en mi ciudad sea Nissan, cuando la destrucción masiva de empleo está teniendo lugar en la construcción (o incluso en el textil).

Es lógica la respuesta de los trabajadores del sector. Defienden su modo de vida y temen que la crisis de sus empresas les aboque al paro o a un empleo aún más precario. Debemos apoyar su resistencia, pero no ser rehenes de los intereses de sus patrones. Unos intereses que ni siquiera garantizan empleo a largo plazo. Por ello es tan urgente contar con planes de reconversión de un sector hiperdesarrollado que contemplen alternativas productivas y garantías sociales a las víctimas del secuestro. Estos miles de personas a quienes sólo les ofrece una alternativa: “o más coches o miseria”.

La crisis crediticia

La música que más suena es que la crisis es sólo el producto de los tejemanejes de unos pocos banqueros codiciosos. Nada que ver con todo el modelo neoliberal. No tenemos un cáncer, solo un tumor benigno.

Una de las variantes de esta historia, al menos en España, es que todo el problema nace de la restricción crediticia. Como todas las historias, hay en ello parte de verdad. Es posible que los banqueros sean cautos en la concesión de créditos y estén aplicando sus fondos en salvar sus propios activos. Si ésta fuera la única causa de la crisis —la negativa de los bancos a conceder créditos a causa de su propia paranoia— parece bastante lógico que las alternativas responsables deberían basarse bien en la concesión directa de crédito a las empresas productivas por parte de instituciones públicas, bien en una intervención directa del sistema financiero para que llevara a cabo su cometido. No parece sin embargo que nadie, al menos nadie con altavoces

públicos, propugne estas líneas de intervención.

Pero es posible que en el colapso actual intervengan otros factores. Al menos se me ocurren dos. El primero es que son las propias empresas las que no utilizan todo el crédito a su disposición. Básicamente porque sus perspectivas de negocio son tan inciertas que no están dispuestas a correr riesgos tomando créditos que no podrán pagar. A favor de esta posibilidad está el hecho de que actualmente la mayoría de créditos (incluidos muchos créditos hipotecarios) tienen la forma de “líneas de crédito”: el tomador puede disponer de dinero hasta el límite de la línea (por ejemplo 150.000 €), es él quien decide qué parte de la línea utiliza. Del mismo modo que quien tiene una tarjeta de crédito puede pagar compras con ella hasta el tope concedido. En este caso el bloqueo empresarial no es crediticio, es de demanda, y reanimar la economía —incluida la creación de empleo— pasa por aumentar el gasto público.

La segunda posibilidad, también bastante plausible, es que la negativa de los bancos a conceder créditos sea debida al grado de endeudamiento de sus clientes. En muchos países el crecimiento reciente se ha sostenido en el endeudamiento. Esto es lo que ha permitido contabilizar salarios a la baja. O lo que ha favorecido expansiones empresariales a velocidad de crucero. Por tanto, sin reducir el nivel de endeudamiento no hay nuevos créditos. Reducirlo pasa precisamente por un cambio en la estructura de reparto de la riqueza en formas diversas, lo cual exige una profunda revisión del modelo social que hemos tenido hasta ahora.

La línea principal de “salvar” al sistema financiero se está revelando inadecuada porque no soluciona ninguna de las tres posibilidades. Ni garantiza un saneamiento rápido del sistema financiero y una vuelta al crédito fácil. Más bien está ahondando lo que ya parece un pozo sin fondo, como ha puesto de manifiesto el plan de salvamento del Citigrup. No genera demanda real, ni reduce el endeudamiento que está en la base de la crisis. Ni supone una salida convencional a la crisis orientada a recuperar el crecimiento económico. Ni, mucho menos, permite ningún avance en la crisis social y ambiental a la que el neoliberalismo ha abocado a la sociedad.

Que la paguen los ricos

Éste es el grito de guerra de la izquierda radical. Justificada por el enorme volumen de dinero que el sector público está abocando a los grandes grupos privados. Y frente a las nuevas amenazas que se ciernen sobre los derechos sociales. Como respuesta intuitiva es comprensible, sitúa el conflicto de clases y denota a los responsables. Pero más allá de una primera respuesta, uno tiene dudas de que esto sea lo mejor que podemos proponer.

En primer lugar porque una crisis económica no es sólo el coste de un

banquete que alguien tiene que pagar. Es un complejo proceso económico que se demora en el tiempo, que genera respuestas en cadena que son las que generan los mayores estragos sociales. Y para paliarlas, evitarlas o revertirlas es menos importante decidir quién paga que cuáles son los mecanismos de respuesta que nos pueden llevar en otra dirección.

En segundo lugar porque en un contexto de predominio cultural tan fuerte de la derecha, para la mayoría de las víctimas correr con el coste de la crisis es inevitable. Las ayudas a la banca, por ejemplo, son fácilmente aceptables por una sociedad habituada a tener cuentas bancarias y temerosa de la bancarrota. La ayuda a los constructores de automóviles se acepta por miedo a la pérdida del empleo... En ausencia de perspectivas distintas los planteamientos sencillos son fácilmente reconvertibles en clave populista. La inacción política o el apoyo electoral a aventureros derechistas han coexistido a menudo con el éxito del chiste fácil y la lectura radical. Tengo en mi entorno a suficiente juventud de clase obrera que combina la condena verbal extrema con la inacción socio-política más absoluta como para temer que ésa sea una posibilidad más que real.

En tercer lugar porque en la situación actual hay que combinar la clarificación política con la necesidad de construir un amplio bloque social que empiece a plantear respuestas en planos diversos. No parece que ello sea posible si nos limitamos a la autocontemplación con la letra gruesa y no nos afinamos en construir respuestas y alianzas. A corto plazo me parece impensable que una respuesta radical sea capaz de aglutinar más allá del puñado de autoconvencidos de siempre.

La movilización y la denuncia son irrenunciables. Debemos acostumbrarnos a participar en múltiples iniciativas, aun a veces contradictorias, que sirvan para generar una oleada de respuestas y demandas. Pero para ir más allá se requiere contar con propuestas y líneas de acción intermedia. Con respuesta a medio y largo plazo que construya un modelo social diferente, en el plano social y en el ambiental. (Y en este sentido también resulta inaceptable la focalización de la crisis en el trabajador masculino de la empresa industrial, una pintura que deja fuera a otro tipo de empleados: a las mujeres que llevan tiempo exigiendo una nueva forma de organizar la vida, a los ecologistas que nos recuerdan cada día que este modelo conduce a un desastre planetario...). Con propuestas de acción orientadas ya a minimizar daños y a proteger efectivamente a las víctimas, con análisis que permita entender la lógica de intereses y mecanismos que nos han llevado a la situación actual. Y para ello se requiere algo más de reflexión y algo menos de sectarismo del que uno percibe en respuestas con las que inicialmente simpatiza.

12/2008

La impunidad del franquismo

Xavier Domènech

El juez Garzón tiene la rara virtud de ponerse en el ojo del huracán de los principales traumas históricos, para ser jaleado o vilipendiado hasta la saciedad, según los gustos. Si le mueve la sed de justicia histórica o bien las ansias para convertirse él mismo en parte de ella, es algo que nos importa poco aquí. Lo cierto es que con esa rara habilidad, sin concluir los procesos que inicia, pone en evidencia las contradicciones más lacerantes de nuestros dirigentes políticos. Fue así en el caso Pinochet, que al llegar a su tierra resucitó después de meses mostrándose como el hombre senil que no era, y lo es ahora con su intento de apertura de un juicio relacionado con las desapariciones en el contexto de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el franquismo de 1936 a 1951.

Esta puede ser una decisión valiente sin duda. Sólo dos elementos del intrincado y prolijo auto de Garzón que abrió este proceso, rápidamente cerrado, llaman la atención. Por un lado su cierre cronológico, por el otro el cierre en aquello que se quiere investigar finalmente. En el primer sentido Garzón opta por limitar su investigación hasta 1951. El argumento para este cierre parece claro, pero no lo es. Garzón situaría el fin de la represión de la posguerra en la finalización de la persecución de la guerrilla antifranquista. Cabe decir que esta represión, la específica contra la guerrilla, no acabó en esta fecha, como cabe decir también que en 1963 Julián Grimau fue aún "ajusticiado" por delitos cometidos en la Guerra Civil. En el mismo camino, es difícil entender por qué la represión franquista en la guerra y la posguerra merece ser juzgada y no así la posterior, lo que llevaría la investigación hasta, como mínimo, 1977 (con los últimos fusilados por el franquismo o asesinatos que, como los de los obreros de Vitoria, no fueron una excepción en nuestra laureada transición) y al banquillo no sólo a los dirigentes de los que Garzón pidió su certificado de defunción, sino a algunos que aún están vivos entre nosotros. Pero este cierre cronológico se hace claro cuando, después de un largo recorrido argumentativo que da vueltas a todo el modelo de impunidad represiva de la dictadura, se observa claramente lo que se quiere investigar y juzgar: la desaparición forzada de personas. Y es en este punto donde empiezan los problemas.

Los argumentos jurídicos que se han desarrollado, no siempre de todas formas, para poder abrir causas a la represión franquista son profundamente deudores no de una reflexión propia, sino de reflexiones prestadas. En este caso el intento de acabar con la impunidad del franquismo ha bebido demasiado directamente de esos mismos intentos en el caso Argentino,

mimetizando dos modelos de impunidad y crímenes contra la humanidad que no son homologables. Eso deviene claro cuando en el auto se afirma que la cifra de víctimas de las desapariciones es de 114.000 personas (en realidad las personas afectadas por la represión en este período son muchas más, pero aún quedan provincias enteras por investigar), cuando en realidad éstas no “desaparecieron”, sin conocimiento de qué había sido de ellas, sino que fueron fusiladas. La ventaja de este atajo es evidente: al no haber muerte certificada el delito no prescribe; pero esto, siendo cierto que en la represión española también hubo desaparecidos, no afronta el aspecto central de la impunidad franquista. Algo parecido se puede decir con la denuncia sobre los niños “robados” a las familias republicanas. El hecho es que en España, a diferencia de la experiencia de los niños robados en Argentina, esa operación se hizo plenamente dentro de la legalidad franquista. En realidad, el ataque global al modelo de represión franquista sólo se puede hacer desde dos ámbitos: desde la anulación de los juicios franquistas o bien desde la derogación —y argumentos jurídicos de peso se han aportado para ella— de la ley de amnistía de 1977.

Contra la anulación de los juicios se ha apelado siempre desde nuestros gobernantes democráticos a que este proceso conllevaría la inseguridad jurídica. Curioso es este argumento que nos tendría que llevar a pensar que el franquismo fue un régimen de seguridad jurídica. De hecho lo que se teme, y nunca se menciona, no es tanto la inseguridad jurídica, sino que esa anulación abra el melón de unas reparaciones (durante los años cuarenta la Ley de Responsabilidades Políticas sancionó uno de los principales procesos de transferencia de rentas y propiedades que ha vivido España desde la desamortización del siglo XIX) que dejarían las indemnizaciones actuales previstas por la Ley de la Memoria Histórica en calderilla. En este marco las consecuencias que habría tenido la investigación abierta por Garzón no habrían acabado con la impunidad del franquismo en nuestro presente, pero, ciertamente, habrían producido una aceleración del proceso de obertura de fosas y habrían dejado al descubierto la necesidad de afrontar realmente un pasado. No era poco, pero ni eso se ha conseguido. La reacción de la judicatura y del poder político en este caso ha dejado bien claro cuáles son los límites del proceso de recuperación de la memoria histórica que nuestros poderes fácticos no están dispuestos a atravesar.

12/2008

Es de temer que Obama quiera compensar la retirada de Iraq cediendo a las presiones ultras que piden un mayor “compromiso” en Afganistán de Norteamérica y sus aliados de la Otan. Ese mayor “compromiso” vendría sugerido por el fracaso de la política de guerra seguida hasta ahora. La resistencia afgana, al que la prensa denomina talibán cuando ni siquiera sabemos si es talibán, pastún o la pura y simple resistencia contra el invasor extranjero que dura ya treinta años, es fuerte. Los bombardeos norteamericanos causan sobre todo víctimas civiles. El gobierno títere de Karzai está completamente aislado. La situación es tal que soldados norteamericanos con consciencia empiezan a desertar, como hicieron en Vietnam, aunque su número es aún muy pequeño. Las tropas españolas, por su parte, se encierran en su base, a la que no dejan entrar a refugiarse a civiles afganos que lo piden para no atraer ataques de los resistentes.

Hay teóricos de la “governancia”, como Francesc Vendrell, inspiradores de la opinión *políticamente correcta* en España, que tratan de justificar la presencia militar española en Afganistán con dos argumentos: que eso es necesario *para nuestra seguridad*, por una parte, y que es lo mejor para los propios afganos. El segundo argumento es, característicamente, un argumento colonialista, paternalista, que avergüenza, pues viene a significar que es la Otan y no las poblaciones, la gente afgana, quien tiene la última palabra en la determinación de lo que les conviene a los afganos.

En cuanto al primer argumento, *el de nuestra seguridad*, casa muy mal con la experiencia que se tiene de lo que es el terrorismo fundamentalista islámico en los países ricos. Quienes atacaron los trenes de Madrid o atentaron en Londres no procedían de ningún “santuario” afgano o pakistaní, sino que eran grupos más bien aleatorios de personas fanáticas que viven en la emigración. La presencia de tropas españolas en Afganistán no puede conseguir otra cosa que excitar en esos grupos los deseos de venganza.

No es de recibo que el presidente Zapatero y la ministra Chacón sigan enviando mensajes de condolencia a las víctimas españolas de esta política de envío de tropas para servir de coartada a la brutal presencia norteamericana. Mensajes para los que incluso parece haber alguna falsilla preparada de antemano y que van acompañados de condecoraciones a título póstumo. Todo eso es vergonzoso. Sería mejor que dijeran la verdad a los familiares de los muertos y a los heridos: habéis sido sacrificados a nuestra política, y los que mandamos os estamos muy agradecidos.

No debemos permitir que se refieran a los muertos en nuestro nombre. Para nosotros, los muertos españoles en Afganistán son víctimas. Como lo son las de las bombas norteamericanas. Un mínimo de decencia política debería hacer volver a esas tropas a casa. Y un mínimo de *compromiso* con la paz debe ser exigido también a nuestros conciudadanos.

12/2008

La otra austeridad necesaria

Joaquim Dodero Curtani

Nuestros políticos se disponen a conjurar —sobre un andamiaje basado en la economía académica no es posible alcanzar mucho más— los efectos derivados de la crisis económica mediante la adopción de “Planes de austeridad” para las administraciones públicas españolas (interiorizando de esta forma la dicotomía público/privado del discurso político liberal, que reclama una austeridad para las administraciones públicas que no exige para asuntos como el de las retribuciones de los altos directivos de las grandes empresas y del sector financiero, uno de los factores coadyuvantes de algunas crisis empresariales recientes).

Consultado el significado de “austeridad”, mi Diccionario me indica que “es la cualidad de austero”, es decir, lo que “aplicado a personas y a sus costumbres, significa reducido a lo necesario y apartado de lo superfluo y agradable. Sobrio”, lo cual nos advierte de que tras la fuerte carga simbólica del vocablo se esconden valores vinculados a intereses de clase contrapuestos, y que asociado al asunto de los Planes que nos ocupan, como se verá, responde únicamente a la lógica de los intereses de nuestra clase dominante.

Ante la pregunta de si puede predicarse como de austera una publicitada medida consistente en la congelación de las retribuciones de nuestros políticos —es decir, de las retribuciones que percibe José Bono, Presidente de las Cortes (13.686 € mensuales); las de los Diputados y Senadores (entre 3.996 y 4.996 € mensuales); las del Presidente Montilla (169.446 € anuales); las de sus Consejeros (127.337 € anuales); las del Presidente del Parlamento de Catalunya (152.954 € anuales); las de los Diputados del Parlamento catalán (una media de 60.000-70.000 € anuales); o las del Presidente del Gobierno español (98.000 € anuales)— no encontraremos una respuesta unívoca.

Si comparamos sus retribuciones con las de los Altos ejecutivos de la “prestigiada” y al parecer “virtuosa” Banca española o de cualquier gran empresa nacional o transnacional, resultan austeras y, por tanto, deberemos admitir que una medida de congelación de las mismas es, por extensión, también austera.

Se llegará a una conclusión de signo contrario si se establece la referencia comparativa con el *salario medio bruto mensual español SMBE* (2.316 € mensuales); el *salario mínimo interprofesional español SMI* (516€ mensuales);

el importe mensual de la *prestación contributiva por desempleo* (de 482,44 € a un máximo de 1.356,86 € mensuales); el umbral de ingresos para acceder a diferentes ayudas sociales conocido como *Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM* (516, 90 € mensuales); el ingreso de los perceptores de la *Renta mínima de inserción* (75% del IPREM); los del *Subsidio de paro* (80% del IPREM); o los ingresos de los perceptores de *pensiones no contributivas* (de 328,44 a 492,55 € mensuales).

Así a don José Bono puede pensar que la medida de congelación de sus retribuciones es austera y ejemplar, pero a un parado o a una perceptora de una pensión de viudedad puede parecerle una de tantas ocurrencias propias de los miembros de las “clases ociosas”.

Otro de los campos de actuación escogidos por los planes de austeridad es el empleo público. El presidente Rodríguez Zapatero ha anunciado la congelación del 70% de la oferta pública de empleo prevista para 2009, reintroduciendo la Tasa de Reposición de plantillas impuesta durante el Gobierno Aznar —que permitía cubrir solo uno de cada cuatro plazas vacantes— fijándola este vez en el 30% de las vacantes producidas. El Gobierno de Cataluña no le va a la zaga, al establecer la congelación de las plantillas de la Generalitat en el texto articulado del Proyecto de ley de Presupuestos 2009, prohibiendo a su vez la cobertura de las plazas vacantes por jubilación.

Con la aplicación de estas medidas sobre el empleo público se profundizará la pendiente de degradación en la que están sumidos muchos servicios públicos de las Administraciones, lo que repercutirá directamente sobre la calidad y cantidad de servicios públicos que percibirán las clases subalternas, sus principales usuarios, abonando a la vez un campo propicio a las privatizaciones y “externalizaciones” (una buena parte de ellas tiene por objeto los servicios sociales).

Las empresas llamadas “de prestación de servicios integrales” serán, una vez más, las beneficiarias directas de esta clase de medidas de austeridad presupuestaria. Al focalizar los esfuerzos de contención del gasto público sobre el Capítulo I del Presupuesto (Gastos de personal), se fomentará una vez más la contratación indirecta de personal mediante ese tipo de empresas (al realizarse las contrataciones con cargo al gasto corriente del Capítulo II del presupuesto). Una reciente Resolución de la Inspección de trabajo y seguridad social de Barcelona ilustra claramente la situación: *“la Generalitat ha resuelto sus problemas de déficit de plantilla recurriendo, no al trabajo de funcionarios públicos o a la contratación de interinos o personal laboral, sino a una empresa prestadora amparándose para no hacerlo, y así burlar la legalidad vigente, en una “contrata” de prestación de servicios que es un mero papelito*

legal para encubrir una realidad muy diferente”.

Con estas medidas de congelación se mantendrá intacta la gran bolsa de precariedad existente en las Administraciones Públicas (la tasa media de precariedad alcanza el 24%), donde la Generalitat ocupa un puesto sobresaliente (el 35% de su plantilla). Por ejemplo, los 34.746 interinos, 6.841 contratados laborales temporales y 21.636 personas contratadas como personal interino de sustitución o de refuerzo en la Generalitat verán prolongada, un año más, su agónica situación, con el riesgo asociado de la pérdida de su empleo, tal como ha venido sucediendo con la aplicación del Acuerdo de “Medidas de austeridad presupuestaria” acordado el pasado 15 de julio por el Presidente Montilla, que prohibía la cobertura de plazas vacantes o la prórroga de los interinajes de refuerzo o sustitución (una buena parte de ellos realizados en fraude de ley, como ha podido comprobar quien escribe estas listas, sindicalista de base de la administración).

Los “planes de austeridad” anunciados reproducen las características (precariedad, prestamismo laboral, prácticas de dumping social) asociadas al modelo de producción y de relaciones laborales propios del patrón de crecimiento económico impuesto por nuestra clase dominante, que nuestros políticos, en sus discursos, reconocen agotado y en crisis, y cuyas consecuencias dicen querer atajar y/o corregir con las medidas de austeridad anunciadas. Tal es la paradoja que conllevan las medidas de austeridad.

Por tanto, se impone la necesidad de que los sindicatos de clase mayoritarios procedan a reclamar con urgencia “otro tipo de medidas austeridad” que protejan a la clases subalternas frente a la crisis económica y que asuman valores sociales diferentes.

Por ejemplo, en el caso catalán, una primera y ejemplarizante medida de austeridad podría consistir en proponer la reducción a un cuarta parte del denominado “Personal eventual de la Generalitat” —la “cohorte de 249 miembros” de los Altos cargos dedicados al Protocolo, Prensa y Asesoramiento, en cuyo grupo destaca el séquito de 62 asesores del Presidente— cuyo coste previsto para el ejercicio 2009 es de 15.276.607,7 €, equivalentes a 2.541.813.648 de las antiguas pesetas, dedicando el consiguiente ahorro a la contratación directa de personal por la Administración para hacer efectivo el derecho a un asistente personal que otorga la Ley de Dependencia a las personas que tengan reconocido un alto grado dependencia, y que no puede atenderse por falta de recursos económicos.

12/2008

Juan-Ramón Capella

Sabido es que Ratzinger ha puesto en pie de guerra a las iglesias de la Unión Europea para que se contrapongan al laicismo. Conocemos las tomas de posición de sujetos como Rouco o Cañizares en este sentido. Pero ahora nos encontramos con una insidia singular lanzada por el arzobispo Luigi de Magistris, un jubilado de la curia vaticana, según el cual Antonio Gramsci murió cristianamente con todos los sacramentos. De Magistris es sardo, o sea, paisano de Gramsci, y al parecer se le ha ocurrido una buena idea para atacar la raíz del pensamiento socialista italiano.

Según él, las monjitas de la clínica donde murió Gramsci, en la clínica Quisisana de Roma le llevaban a petición del preso enfermo una imagen del Niño Jesús. Dice también que Antonio Gramsci conservó siempre una estampita de Santa Teresita del Niño Jesús procedente de casa de sus padres.

Esto último incluso me lo podría creer: yo conservo recordatorios de mi primera comunión, pero eso no significa que siga comulgando con el “Pan de los Ángeles”. Lo del Niño Jesús también se podría entender en un *preso* gravemente enfermo que precisaba cuidados de las monjas-enfermeras, seguramente mejores que las que en España, casi al mismo tiempo, arrebataban sus hijos a las presas diciéndoles —piadosamente, se entiende— que habían nacido muertos. Y no cabe duda de que seguramente considerarían una buena obra extremaunciar a un moribundo atormentándolo o no con la exigencia de su consentimiento.

Con todo, no hay documento alguno de Antonio Gramsci ni de su entorno que dé signo o indicio de un regreso “a la fe de su infancia”. Todo lo contrario: su pensamiento sigue vivo hoy, y nos ayuda. Lo que tenemos, más bien, son todos los signos, indicios y demás muestras claras de que *para el episcopado católico todo vale*. Si se puede oponer al aborto, recomendar la abstinencia sexual como medio para combatir el sida, condenar el uso de preservativos o las relaciones no heterosexuales, ¿qué mal puede ver en una mentirijilla que, como la existencia de los ángeles, no se puede desmentir de modo irrefutable?

Siembra cizaña —debe pensar el Arzobispo—, que algo queda.

12/2008

Izquierda Unida nombra a la Virgen del Rosario “alcaldesa perpetua” de Teba (Málaga)

Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Ateos (FIdA)

La noticia de que la corporación municipal de Teba (Málaga) —encabezada por Juan Anaya, de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) — nombró el pasado sábado a la Virgen del Rosario alcaldesa perpetua, en un acto celebrado en la iglesia parroquial de la Santa Cruz, nos ha causado, verdaderamente, no poco estupor.

Desconfiamos todavía de su veracidad, al ser la prensa clerical la única que hasta el momento ha pregonado la buena nueva (Ecclesia Digital, 06.10.08). Tampoco hemos podido contactar hoy con ningún responsable del Ayuntamiento, por lo cual nos arriesgamos con la emisión de este comunicado a ser víctimas de un bulo propiciado por los medios católicos. En cualquier caso, sea cierta o no la designación, no sería la primera vez que la “izquierda” —o lo que como tal se define— se cubre de gloria bendita nombrando funcionarios municipales a Cristos y vírgenes, inclinándose ante aromáticas reliquias o liderando procesiones, con peineta, mantilla y cirio incluido. Recuérdese, si no, el Cristo Nazareno de Rota, nombrado el pasado agosto “Señor de la Villa” gracias al apoyo de los concejales del PSOE. O las genuflexiones del alcalde “social-bonista” de Toledo al recibir oficialmente los restos momificados de san Ildefonso. O la premeditada ausencia de los socialistas —para no quedar mal ante el devoto público— en el pleno que en Morón de la Frontera (Cádiz) elevó a la María Auxiliadora a la categoría de honoraria alcaldesa. Nombramiento que, por cierto, no evitó el terremoto de intensidad 4,4 que sacudió a la localidad apenas hace cuatro días. Ironías de la naturaleza...

Estas figuras de la retórica nacional-católica, que amenazan, como claves de otro seísmo, la escasa consistencia de un Estado tan poco laico como el nuestro y tan sujeto a la parafernalia de lo rancio-kitch, evidencian por un lado la victoria propagandística de la Conferencia Episcopal, en pie de guerra desde hace ya un año, y, por otro, la asombrosa incapacidad de buena parte de la progresía política para comprender las bases más simples de la tradición democrática europea. La separación entre las iglesias y el Estado es un fundamento tan necesario para la convivencia como el sufragio universal, la igualdad de todos ante la ley o la libertad de expresión. Cuando falla alguna de estas premisas, todo se tambalea. Y —en serio— no hay Cristo que se salve en esas circunstancias.

¿Por qué la izquierda ha olvidado su herencia materialista? ¿Cómo ha sido

posible que el milenarismo de raíces cristiano-evangélicas haya pasado a representar, en la mentalidad colectiva, un sustituto de la izquierda, históricamente atea? Se acepta la crisis del marxismo oficial como animal de compañía, claro. Pero, ¿acaso no tenemos pruebas, todos los días y uno tras otro, de la salvaje ofensiva emprendida por los radicalismos religiosos en busca de la ocupación totalitaria del espacio público? Las beatas decisiones de estos grupos municipales, aparentemente empeñados en la igualdad social, nos hacen retroceder, a todos, al tiempo de los multitudinarios Congresos Eucarísticos, de la censura eclesiástica, del imprimatur, del Syllabus de Pío nono y de las cruzadas contra el ateísmo, la inmoralidad y el diabólico comunismo. Franco, Franco, Franco... Tiempo, en realidad, no tan lejano, a juzgar por las declaraciones de Ratzinger en la apertura del XII festival de los obispos que se inauguró ayer en Roma.

Y hoy, otra vez, los funcionarios de la izquierda andaluza derrochan imaginación y se superan a sí mismos, renegando de lo que antaño era un símbolo de su identidad —el racionalismo práctico— y cayendo en los brazos de la superstición mariana, de la devoción popular —esa sin cuyos votos, ellos lo saben, carecerían de despacho y secretaria— y del descrédito político.

Urge un replanteamiento de la izquierda. Urge una aplicación correcta de las leyes fundamentales que establecen una separación clara entre lo público y lo privado. Urge un compromiso por el laicismo, real, objetivo, sin matices ni adjetivos, como desean los teocons y el clero aliado.

Por el momento, esperaremos a que se compruebe la realidad de la payasada consistorial de Teba. Y, si se da por cierta, exigiremos a la Dirección Federal de IU y a sus responsables en Andalucía una acción correctiva, y clamaremos, de nuevo, a la Federación Española de Municipios y Provincias para que aplique las medidas necesarias, si es que las hay. Mientras tanto, no queda sino rogar para que la deriva medievalista de algunos ayuntamientos no acabe siendo norma general, aceptada en razón del folklore, del santoral y de la pía inspiración del beaterío popular y del Obispo correspondiente. ¿España, un Estado laico? Y un cuerno.

8/10/2008

Las dos Gomorras

Mariano Maresca

Ha salido una edición económica de Gomorra, el extraordinario libro de Roberto Saviano sobre la Camorra napolitana y, en realidad, sobre algo más importante: la sustitución del Estado por la Camorra en funciones esenciales de cualquier sistema social. Compren el libro y léanlo con atención, sin dejar que lo bien escrito que está les haga ir más rápido de lo conveniente. Cuando lo hayan acabado serán un libro más sabios y un disgusto más viejos. Después, vean la película del mismo título de M. Garrone hecha a partir del libro y se llevarán dos sorpresas mayúsculas. Primera: quien no haya leído el libro difícilmente podrá entender (y mucho menos calibrar su alcance) episodios como, por poner un solo ejemplo, el de una extraña subasta de patronos de costura, que en el libro se traduce nada menos que en la denuncia de la articulación con el poder mafioso del ciclo completo de la producción, financiación y diversificación en distintos mercados de toda la industria de la moda y el made in Italy, Segunda sorpresa: en la película no verá ni a un policía ni a un periodista ni a un político, mientras que en el libro su presencia es la clave de muchas cosas. Caben más objeciones, igualmente graves: en la película no hay rastro de la abundante reflexión de Saviano sobre los cambios del papel de las mujeres en la Camorra; la conexión de narcotráfico y tráfico de armas se simplifica en extremo, etc. En fin: nadie se va a atrever a decir que Gomorra es una película fallida y hasta muy cuestionable porque Saviano está viviendo una situación intolerable. Pero eso no debiera cegarnos. Lo dicho: lean el libro.

12/2008

En la pantalla

Nicolas Klotz

La cuestión humana

Francia, 2007

Los eslabones del mal

*He entrado en el imperio corrosivo
y sin límites de la injusticia*
León Felipe

La cuestión humana (*La question humaine*, 2007), de Nicolas Klotz, quizás diste de ser una película memorable —puesto que tiene algunas secuencias vanas e inútiles, que recuerdan trabajos fallidos del realizador—, pero tiene el valor incuestionable de plantear con claridad algunas cuestiones éticas absolutamente centrales (y molestas) de nuestro tiempo. El encargo de un alto cargo de una empresa petroquímica transnacional de ver el estado de salud mental de su presidente en Francia, lleva a Simon, el psicólogo de la empresa adscrito al departamento de recursos humanos, a enfrentarse al pasado y al presente del ejercicio del poder. Y no, por cierto, al ejercicio abstracto de este poder, sino a sus materializaciones más concretas y actuales.

Para alguien que no haya leído nada sobre esta película, a medida que avanza el metraje va abriéndose paso una sospecha inquietante: que por detrás de ese encargo anida algo más (y, sobre todo, algo más terrible que la lucha por el poder en el seno de una multinacional). Esta sospecha va prendiendo poco a poco: las delaciones extraoficiales que acompañan los expedientes oficiales, la canción que asume que “los buenos aceptan la maldad” (como la pesada carga que hay que llevar), etcétera. Son sólo indicios, pero estamos entrando en el centro del discurso, que cubre la segunda parte de la película.

Siendo una empresa alemana, los tres personajes a que se enfrenta Simon en su indagación tienen en su pasado remoto, cuando eran niños todavía, el pasado nazi. Pero es un pasado que funciona más bien como un espejo del presente: condenado por una parte, pero absolutamente vigente por la otra. Como cualquier película en la que lo que importa consiste sobre todo en lo que se dice (lo que se dice en términos cinematográficos), *La cuestión humana* se desentiende finalmente de la historia. En parte, porque es la nuestra, y la del protagonista.

El viaje de celuloide conduce hasta Ariel Neuman (Lou Castel, con su cara

inocente de niño, a pesar de su edad) y sobre todo hacia lo que dice. Es en sus palabras (y en el final en negro y su siniestra evocación) donde se abre la clave de la película, donde todo adquiere sentido. Porque lo único que ésta pretende someter a discusión es mostrar que lo horroroso que acomuna el nazismo con el liberalismo económico es, en realidad, el dolor atroz que causa en sus víctimas: son los eslabones del mal, que a veces terminan con la muerte. También, por supuesto, los que causan el aséptico departamento de derechos humanos de las empresas.

Josep Torrell
12/2008

La Biblioteca de Babel

Vasili Grossman

Todo fluye

Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2008, 288 pags.

Éste es el último libro, una novela-ensayo, del autor de Vida y destino, y su traducción castellana (de Marta Rebón) una excelente noticia. Aunque el estilo literario de Grossman delata al gran periodista que fue, para bien y para mal, su trasfondo tiene una densidad que difícilmente pueden alcanzar los escritores light preferidos por la gran industria editorial y recomendados por los enchufados de universidad que suelen ejercer de críticos en los media de los grupos empresariales correspondientes. Todo fluye facilita hacerse una idea bastante precisa de las causas de la apatía política en que cayeron las poblaciones de la antigua Unión Soviética y el tipo de mentalidad que fomentó la versión burocrática de aquella falsedad bautizada como “socialismo en un solo país” y que acabó en nacionalismo granruso. La criminalidad del gobierno staliniano y la complicidad con él de tantas gentes corrientes, agentes embaucados suyos y a la vez víctimas, aparecen dibujadas con una precisión que causa horror, en especial las grandes hambrunas causadas por la colectivización forzosa del trabajo campesino, de una parte, y de otra el infierno represivo de aquel poder despótico. Grossmann es de los que hubieran podido decir con verdad aquello de nada humano me es ajeno. La lectura de Todo fluye ensombrece el espíritu hasta el punto de obligar al lector a interrumpir la lectura para recuperar el ánimo. Su libro manifiesta una verdad sublevante y un horror indecibles.

Juan-Ramón Capella
12/2008

Henning Mankell

El chino

Tusquets, Barcelona, 2008, 471 pags.

A los aficionados a la novela negra seguidores de Mankell les complacerá este nuevo libro suyo. El autor parece seguir ahora las huellas de John Le Carré, y urde una interesante trama en la que salen a colación cuestiones nada despreciables para los lectores de la izquierda social: desde una visión muy certera de la construcción de los ferrocarriles intercontinentales norteamericanos en el siglo XIX a las encrucijadas de las políticas desarrollistas de la China contemporánea. No faltan reflexiones de Mao Zedong que obligan a pensar.

Juan-Ramón Capella
12/2008

Manuel Fernández-Montesinos

Lo que en nosotros vive

Tusquets, Barcelona, 2008

El autor de esta autobiografía es hijo del alcalde de Granada asesinado por los franquistas y sobrino carnal de Federico García Lorca. Las ciento y pico primeras páginas del libro tienen gran interés por describir el ambiente familiar del que ha sido amputado Federico y el exilio familiar a Norteamérica, harto el padre del poeta de “este jodío país”. También tiene interés por relatar aspectos de la vida de los exiliados intelectuales republicanos en los Estados Unidos. Más adelante la capacidad de la narración para interesar al lector se diluye bastante, al ser el Fernández-Montesinos adulto un representante bastante característico de la cultura del Psoe de Felipe González, partido por el que fue varias cositas.

J-R. C.
12/2008

Joan Margarit

Misteriosament feliç

Proa, Barcelona, 2008

Los lectores de poesía de habla catalana o que pueden acceder a ella podemos tener unos instantes de dicha. El nuevo y duro libro de Joan Margarit es, una vez más, un artefacto para encontrarnos con nosotros mismos. No te lo pierdas, lector, lectora.

Juan-Ramón Capella
12/2008

**Manfred Linz, Jorge Riechmann (ed.) y Joaquim Sempere; VV.AA.
(Jorge Riechmann, coord.)**

Vivir (bien) con menos. Sobre suficiencia y sostenibilidad, ¿En qué estamos fallando? Cambio social para ecologizar el mundo

Icaria, Barcelona, 2008

Tres son los caminos que se han de recorrer para la indispensable reconstrucción ecológica de nuestras sociedades: eficiencia, coherencia y suficiencia. Tras veinte años de debate sobre la sostenibilidad, la ecoeficiencia, esto es, la mejora de la productividad de los recursos naturales —o, más simplemente, “hacer más con menos”— se ha convertido hoy en el

camino más transitado, pese a que nos hallemos aún muy lejos de haber alcanzado sus potenciales resultados (como los previstos, por ejemplo, en la propuesta “factor 4” establecida en un comentado informe al Club de Roma). La eficiencia, de hecho, cubre a menudo todo el significado que se otorga a la sostenibilidad. Así, por ejemplo, en los discursos sobre el asunto de la Unión Europea. El problema de ello es lo que se conoce como “efecto rebote”, o sea, que el ahorro logrado inicialmente en materias primas y energía, queda desperdiciado por el consumo cuantitativamente mayor provocado por tal mejora (¿Qué cambio se produce si fabricamos coches que disminuyan a la mitad sus efectos contaminantes cuando la producción de éstos aumenta el doble?).

La segunda vía, la llamada coherencia (que es lo que Jorge Riechmann denomina “biomímesis”), también ha empezado a ser acogida, aunque tímida y tardíamente, en la vulgata empresarial y gubernamental de la sostenibilidad. Se trata, dicho de forma escueta, de desarrollar tecnologías más compatibles con la Naturaleza, tales como la energía solar, los biocombustibles, etc. El problema de esta estrategia es no sólo que resulta practicable únicamente en pequeñas escalas, sino que, tomada en exclusiva, tampoco sirve para alcanzar el fin deseado ya que no hay intervención en la naturaleza que se halle absolutamente libre de impactos.

Por estas razones, el libro Vivir (bien) con menos, (que reúne textos de M. Linz, J. Riechmann y J. Sempere) propone reflexionar con buen tino sobre el tercero de los caminos, la suficiencia, que ni que decir tiene es el que menos entusiasmos genera en nuestras sociedades consumistas. La suficiencia o austeridad viene a ser el inoportuno personaje que de pronto se presenta, sin estar invitado, a la boda que algunas celestinas bien retribuidas pretenden concertar entre el capitalismo y medio ambiente. Pero, mal que pese a algunos, pocas dudas caben: un sistema económico expansivo y una cultura permanentemente insatisfecha resultan absolutamente disfuncionales para la sostenibilidad del medio donde de forma inevitable se desenvuelven. O dicho más claramente: capitalismo y consumismo se hallan en la base de la crisis socioecológica mundial. Y hay que escoger: o bien organizamos la producción, el trabajo y el consumo de otra manera (en base a la medida y la suficiencia y no de acuerdo al “siempre más”) o continuamos adentrándonos en la selva de la barbarie ecosocial.

Pero, ¿por qué estamos eligiendo lo peor? ¿Cómo y por qué la dinámica expansiva capitalista no cosecha mayores resistencias aun cuando suponga una grave amenaza para la misma supervivencia de la humanidad?, ¿Sobre qué rasgos antropológicos, culturales, sociales, institucionales, históricos... descansan estas dinámicas ecocidas? Desde distintas perspectivas, los trabajos que recopila el otro libro que aquí presentamos, de título no menos

elocuente, ¿En qué estamos fallando?, tratan de responder a estas cuestiones. Su interés no requiere, pues, demasiada justificación. No podemos paralizarnos frente a este panorama a menudo tan desolador: hay que seguir pensando, hemos de continuar actuando. Y estos dos libros son una valiosa contribución para ello. En ambos casos, el ya conocido buen hacer de Jorge Riechmann (a quién se le ha de agradecer una vez más poder acceder a estas discusiones originadas en ámbitos más restringidos) y el prestigio de los autores que le acompañan son una inmejorable garantía del provecho que se puede obtener al recorrer estas páginas. Y su lectura, en efecto, no defrauda

Xavier Pedrol
12/2008